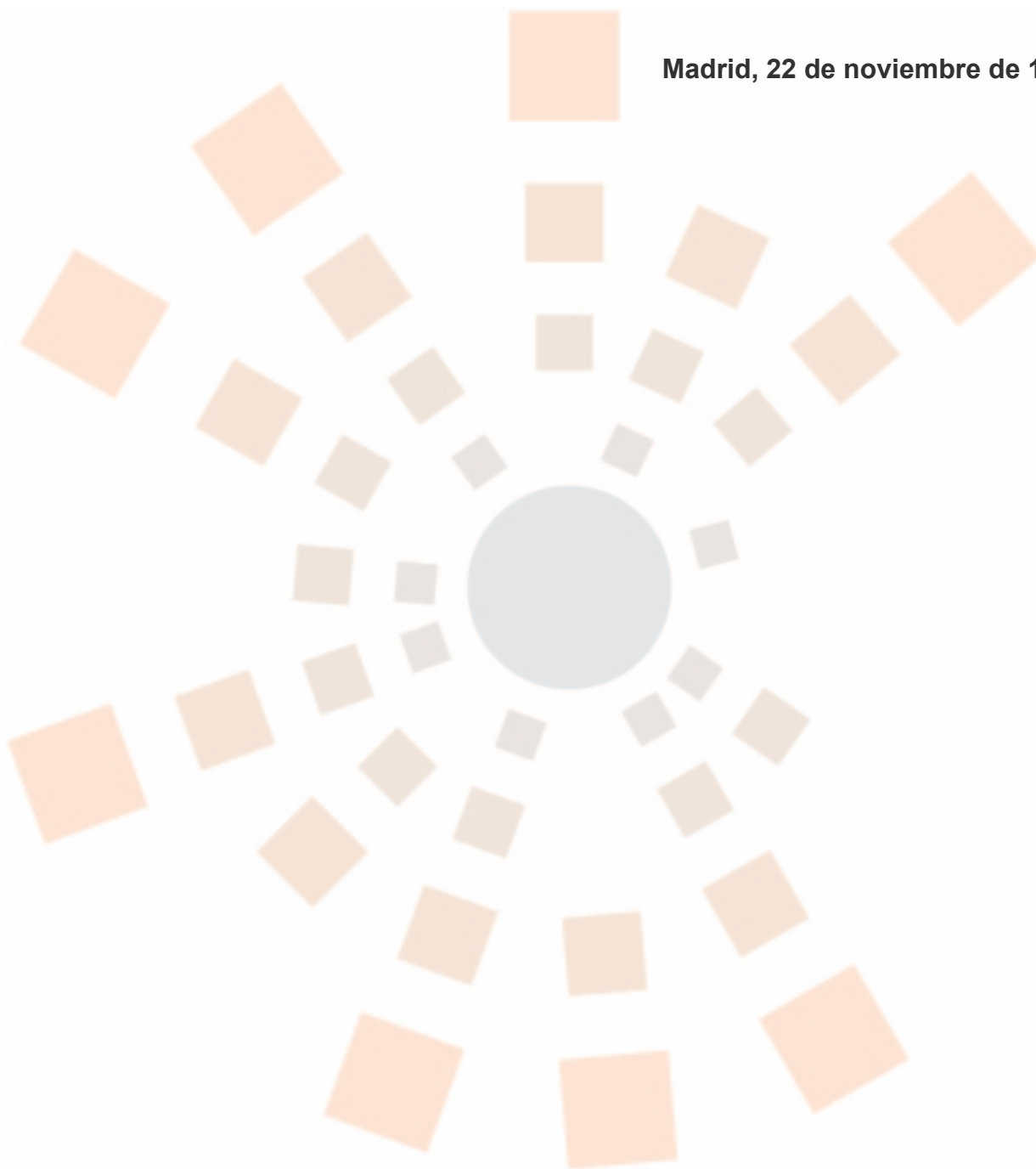


**INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. PRESIDENTE EN LA  
CONFERENCIA DEL CLUB SIGLO XXI: “EL PELIGRO DEL  
DESENCANTO POLÍTICO”, PRESENTADO POR ROSA DÍEZ**

Madrid, 22 de noviembre de 1999



**INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. PRESIDENTE EN LA CONFERENCIA DEL CLUB SIGLO XXI: “EL PELIGRO DEL DESENCANTO POLÍTICO”, PRESENTADO POR ROSA DÍEZ**

**Madrid, 22 de noviembre de 1999**

Muchas gracias, buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, señor presidente del Club Siglo XXI, señores de la junta directiva.

Permítanme en primer lugar que agradezca al Siglo XXI y a su junta directiva la renovada atención que han tenido conmigo, puesto que no es la primera vez que tengo el honor de ocupar la tribuna de este prestigioso Club Siglo XXI, que precisamente dentro de unas semanas celebra su onomástica. Por lo tanto yo les felicito y les animo a continuar por este camino.

Y, para esta conferencia he querido, puesto que es habitual que en el Siglo XXI al conferenciante le presente una persona, he querido que fuera alguien por la que siento un aprecio especial, que es Rosa Díez, persona que ya ha dicho algo que me ha llenado de cierto rubor y te pido, Rosa, que no rompas esas notas, pues te pediré que me presentes algún día en Extremadura, para que allí digas lo que has dicho, aquí en Madrid, porque no estoy yo acostumbrado a escuchar esas cosas allí en mi tierra. Rosa Díez es la única candidata que, además, puede presumir de haber despertado la curiosidad de muchos españoles en la última campaña electoral, en las elecciones europeas, simplemente por la imagen que transmitían sus carteles electorales, imagen de alegría, de espontaneidad y que, además, esa imagen después se correspondía con el discurso que a lo largo y ancho de toda España, Rosa hizo en esa campaña electoral. Y esta es una de las razones por la que quise que me presentara, porque es una persona espontánea y porque habla también con claridad y con sencillez. Y porque además creo que de las cosas que voy a decir esta noche aquí, pues Rosa es un exponente de estas opiniones y de estas reflexiones que me propongo hacer ante ustedes. Y también por un motivo egoísta, que además se puede confesar: porque yo quiero presumir de haber sido el primero, que dentro del partido apostó por ella como la mejor cabeza de lista para las elecciones europeas. Después fueron muchos los apoyos y aún más, después de los resultados que obtuvo Rosa Díez, pero quede claro a todos los efectos y por la historia, que yo la vi primero. Así que muchas gracias Rosa por tus palabras y por tu presencia.

He titulado mi conferencia con el título “El peligro del desencanto político” dentro del ciclo que el Club Siglo XXI lleva en esta temporada. Y la he titulado “el peligro del desencanto político” con el objetivo de que dicho título me pueda permitir adentrarme en tres reflexiones, que desde mi punto de vista, pueden ayudar a conjurar este peligro, el desencanto, que se cierne no solamente sobre la democracia española, sino yo creo que también sobre muchas democracias occidentales.

No me voy a detener a reflexionar, porque sería muy largo, sobre lo que considero que son causas superficiales de ese posible desencanto que se aprecia en la política española. Llamo causas superficiales a lo que mediáticamente parece ser lo que más reluce a la hora del análisis político, sobre todo después de un proceso electoral. Me refiero a circunstancias como la corrupción, el funcionamiento interno de los partidos, los sueldos de los políticos, las listas abiertas o cerradas, "las primarias o no primarias", el modelo de campaña, el modelo de precampaña, etc., etc.. Todo esto me parece que son causas superficiales respecto a las que, sin duda, una mejor regulación de las mismas ayudaría, pero no influiría decisivamente a la hora de ahuyentar el peligro del desencanto político de los ciudadanos.

Me propongo reflexionar ante ustedes sobre tres aspectos que sí considero fundamentales para un mayor acercamiento del ciudadano al sistema democrático:

En primer lugar, el funcionamiento de las instituciones, y más concretamente, la utilización del poder judicial como instrumento de erosión o eliminación del adversario político.

En segundo lugar, la diferenciación, ante los ciudadanos, de las diferentes ofertas políticas.

Y en tercer lugar, la definición de una concepción común de España.

Empiezo por el primero. Funcionamiento de las instituciones.

Los políticos no ejercemos nuestra responsabilidad en el espacio sideral. Nuestra acción se desarrolla en un país, en nuestro caso concreto, España que, según la voluntad de los españoles, manifestada en 1978, es un Estado democrático y de derecho.

Cuando los ciudadanos percibimos que, por encima del voto, se imponen otros mecanismos para hacerse con el poder, y cuando tomamos conciencia de que el Estado de derecho cuenta poco si de lo que se trata es de conseguir el poder a cualquier precio, tenemos la sensación de vivir lastrados por la aceptación de la injusticia y, por lo tanto, impotentes para que prevalezca el juego limpio y democrático. Cuando la impotencia, en consecuencia, hace aparición en los ciudadanos que solo tenemos nuestros votos para realizar un proyecto político, el desencanto y el cinismo tiene preparado el caldo de cultivo para que el virus de la abstención haga su aparición.

No obstante, los ciudadanos podemos tener la sensación cierta de que vivimos en un Estado democrático si el nivel de participación en un proceso electoral es bajo. Ahí está EEUU para acreditar lo que digo.

Podemos seguir incluso con esa sensación de vivir en un sistema democrático si el poder ejecutivo o el poder legislativo no se conducen con la libertad que una democracia de verdad aconsejaría. Ahí están los casos de Chile, Rusia, Venezuela o Perú por citar algunos ejemplos.

Pero es imposible que esa sensación de vivir en democracia anide en la conciencia del ciudadano demócrata si el poder judicial no se adapta a la responsabilidad que la Constitución le tiene encomendada. Esa decepción es mi caso y desgraciadamente siento decir que seguramente el caso de millones de españoles.

Me basta para llegar a esta triste conclusión, el que haya un solo ciudadano que, en lugar de ver protegidos sus derechos por los encargados de impartir justicia, sea víctima de una cacería política, basada, no en la comisión de un delito, sino en una trama conspirativa, montada para superar la incapacidad de la derecha española para conseguir el poder o para mantenerlo cuando lo ha conseguido.

Si la percepción que se apodera de mí es que no se está persiguiendo a un ciudadano, por muy alta que haya sido su responsabilidad política o institucional, sino que se está yendo a la eliminación de toda una forma de ver y entender la sociedad, cual es el socialismo, cualquier silencio cómplice nos imposibilita para que la convivencia libre y pacífica reine entre los españoles.

Por ejemplo, los Sres. Vera y Barrionuevo ya fueron condenados sin respetar sus garantías constitucionales, en un procedimiento judicial plagado de irregularidades, con un juicio oral, al que asistí como testigo, en el que nadie pudo probar culpabilidad alguna, como consecuencia de una operación política de criminalización selectiva de la primera experiencia de un gobierno de izquierda en España.

Para quienes les parezcan duras estas primeras palabras, recuerdo las tardías revelaciones del Sr. Ansón a una revista de información política, abro comillas, “Fue una etapa de crispación realmente terrible -dice Ansón-. Y no fue arbitraria. Existían poderosas razones para esa guerra fría. La cultura de la crispación existió porque no había manera de vencer a Felipe González con otras armas. Ese era el problema - continúa Ansón -. González ganó tres elecciones por mayoría absoluta y volvió a ganar la cuarta cuando todo indicaba que iba a perder. Hubo que elevar la crítica hasta extremos que a veces afectaron hasta el propio Estado. González bloqueaba algo vital en una democracia: la alternancia. Si González llega a ganar las elecciones del 96, con la bonanza económica no hubiera habido quien le echase del poder hasta el 2004. No salimos de 40 años de Franco para entrar en 30 años de Felipe González”.

No es posible, señoras y señores, que los ciudadanos no nos sintiéramos desencantados ante ese reconocimiento de que nuestro voto, el voto de los ciudadanos, tenía poco valor frente a otros instrumentos utilizados para cambiar la voluntad democrática de quienes solo podemos poner o quitar gobernantes con nuestro voto. Jamás habíamos oído, jamás, habíamos oído, una cosa igual en la Inglaterra de Thatcher, -que algunos años llevaba gobernando-, o en la Alemania de Kohl, -que otros cuantos llevaba gobernando -, o si se quiere, en la Cataluña del señor Pujol.

Resultó estremecedor que el autor de esa confesión, señor Ansón, no hubiera sido llamado a declarar por un fiscal o por un juez de la Audiencia Nacional para que aclarara el extremo de sus declaraciones que confesaban una operación hasta decía él: “el límite de poner en riesgo el Estado democrático”.

Siempre pensé que desaparecido Felipe González de la Presidencia del Gobierno de la forma en que lo contó Ansón, podía tener esperanzas, yo podía tener esperanza, de reconciliarme con la democracia, porque atribuí la conspiración a un problema puramente, aunque dramáticamente, personal. Ni siquiera pensé que Aznar era subjetivamente importante en el acoso. Simplemente era útil y se prestó a la “cosa”.



Ahora sé que me equivoqué, que para los que tienen como objetivo el poder, a cualquier precio, incluido poner en riesgo la estabilidad del Estado democrático, el juego sucio no tiene fin, ni límites.

Ahora sé que la cacería no ha terminado y sé que en esa cacería el poder judicial está jugando un papel que linda el encubrimiento, cuando no el protagonismo de la misma.

Nunca quisiera haber llegado a esta desazonadora conclusión. Primero porque para vencer el desencanto político es necesario confiar en un poder tan importante como el Judicial.

Y segundo, porque siento la terrible sensación de que Felipe González y el socialismo sigue siendo y siguen siendo la pieza a abatir, y por lo tanto, siguiendo el razonamiento de Ansón se sigue poniendo en peligro la estabilidad del sistema democrático.

Se pone en peligro la credibilidad en la política y en la justicia, cuando en el proceso seguido hace unas semanas contra el ex-juez Gómez de Liaño, uno de los testigos que fueron a declarar, el Juez de la Audiencia Nacional, Sr. Garzón, manifestara en el interrogatorio que en dicha Audiencia, -se publicó en todos los periódicos-, un grupo de jueces y fiscales buscaron, con el poder que le hemos entregado el pueblo, no perseguir el terrorismo o el narcotráfico, que es su misión, sino terminar con el "felipismo", es decir, con el gobierno que presidía Felipe González por voluntad democrática de la mayoría de los españoles.

Es decir, una parte del poder mediático, -según revelaba Ansón-, y una parte del poder judicial, - según revelaba Garzón -, buscando subvertir el orden democrático que habían establecido los electores.

Si produce desconcierto en los demócratas que el poder judicial se emplee para fines espureos e ilegítimos, más desconcierto provoca que el autor de esas confesiones, el señor Garzón, no fuera o no haya sido instado a confirmar quiénes, cuándo y dónde se produjeron esos comentarios y por qué no fueron denunciados por quien los oyó en ese momento.

El testigo que oyó y ocultó esa conspiración no puede hoy levantarse como un juez creíble en la imputación de un cargo contra la víctima de la conspiración y contra quienes les acompañaba. Aunque fueran ciertas las pruebas que tenga en su poder dicho magistrado, aunque fuera culpable Felipe González de lo que se le imputa, que parece que no lo es por unanimidad de la Sala, cualquier ciudadano español sabe que el Sr. Garzón está desautorizado para instruir, ahora y hasta el año 2015, cualquier causa contra Felipe González, José Barrionuevo, Rafael Vera o José Luis Corcuera.

Si un juez londinense tuvo que abstenerse en el procedimiento de petición de extradición del dictador Pinochet, porque su mujer era miembro de una ONG que actuaba, a su vez, en el proceso como acusación particular, si un juez belga tuvo que inhibirse de instruir la causa contra unos pederastas, recusado por haber mantenido una conversación humanitaria con las familias de las víctimas, ¿cómo es posible que el poder judicial permita que quien formó parte del gobierno de Felipe González y salió del Ministerio del Interior, -según dice la prensa-, profiriendo amenazas contra los autores de su frustración política, no esté contaminado y, por lo tanto, recusado de oficio para imputar a quien, desde sectores de la Audiencia

Nacional y desde otras instancias mediáticas y políticas, había que eliminar políticamente?

Si queremos que los ciudadanos se sientan reconciliados con la política necesitamos hacer de esos ciudadanos el centro de nuestras actuaciones, y más, cuando nuestro proceder es consecuencia del poder que esos ciudadanos nos han prestado.

Convertir a los ciudadanos en protagonistas de la política y no en meros espectadores de lo que se hace sin su consentimiento y sin su comprensión, es hacerles sabedores de las actuaciones que se adoptan, por qué se toman y para qué fines.

De igual forma que el ejecutivo y el legislativo están obligados a explicar a los ciudadanos las razones de sus decisiones, los españoles que antes se llamaban de provincias y ahora nos llamamos de la periferia, estamos decididos a plantear preguntas al poder judicial que no tiene más remedio que responder, ya que su poder emana del pueblo, y ese pueblo no entiende que su voto valga menos que decisiones judiciales ininteligibles por inexplicadas.

Con un clima social enrarecido de esta manera, cabe preguntarse: ¿es posible que los ciudadanos no se desencanten de la política?

Segunda cuestión. La diferenciación de las ofertas políticas.

Lo que debemos hacer los políticos es ser bien explícitos en nuestras propuestas, de modo que los ciudadanos puedan distinguir las propuestas de unos de las de otros. Y como mi preocupación es, desde luego, la de un hombre de izquierdas, pretendo contribuir a movilizar voluntades y a neutralizar el desencanto que puede provenir de la confusión de las ofertas. La izquierda debe luchar por perfilar un discurso propio y no dejarse atraer a un confuso campo que se dice de nadie, pero que con la excusa del voto de centro, del fin de las ideologías y de la globalización, es el terreno de juego natural de la derecha.

Quienes tenemos un planteamiento político deudor del socialismo tenemos que hacer frente, en estos momentos, a un debate ideológico y teórico que nos obliga a replantearnos muchos conceptos, a renovarnos, sin ninguna duda, pero también nos obliga, si no queremos defraudar, a mantener vivas nuestras señas de identidad. La renovación del pensamiento socialista no puede confundirse con el travestismo. Una cosa es renovarse para adaptarse a las nuevas circunstancias del mundo, y otra cosa es la transmutación ideológica para dejar de ser lo que representamos, es decir, la opción del progreso cualitativo y solidario.

En la actual coyuntura política nacional estamos a punto de poner a prueba nuestra capacidad de adaptación y la paralela persistencia de nuestras señas de identidad. Tras trece años de gobierno de la izquierda, la derecha volvió a ocupar el poder en 1996. Nos encontramos los socialistas en una situación que no es nueva, a pesar de quienes quieren plantearlo así. A lo mejor no es tan incierta esa tontería de la "segunda transición", porque en este país ya se sabe que las transiciones terminan por aupar al poder a un socialismo renovado, fuerte y cohesionado como nunca. Y esto puede comenzar a oler a un fin de ciclo a poco que se pise el acelerador. Así pues, pongamos fin cuanto antes a este periodo transitorio para alumbrar de nuevo la normalidad, esa en la que los ciudadanos mayoritariamente de centro izquierda ponen a una fuerza de ese signo en el poder.

Hoy parece evidente que, tras el fracaso del comunismo, el socialismo es la única opción relevante en el espacio de la izquierda, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. El socialismo no tiene que enfrentarse a ninguna oferta inquietante en el ámbito de su izquierda, su único referente de confrontación está en la derecha, es con ella con la única que debe competir política y programáticamente. Puesto que no hay nada que le obligue a cuidar especialmente el flanco izquierdo, el socialismo puede permitirse el lujo de avanzar hacia la derecha para disputar con ella un espacio de clases medias, parte de cuyo apoyo electoral ha disfrutado históricamente.

Cada día es más obvio que la izquierda puede volver a ganar las elecciones, pero el combate será tremendamente desigual. Y no sólo por el tono desesperado de la campaña de las pensiones, unos nervios que los propios socialistas conocemos muy bien, puesto que lo vivimos en carne propia cuando nuestro gobierno se vio también en una situación difícil y apostó sin éxito duradero por el tremendismo. Ya se sabe que en este país cuando un gobierno se pone nervioso, le da por los vídeos catastrofistas en blanco y negro. Ese es un escenario terminal bien conocido que sólo puede anunciar un cambio de turno próximo.

Para captar ese voto que la izquierda necesita para llevar adelante su proyecto, se precisa algo más que hacer la obligada crítica de la gestión gubernamental de la derecha. Tampoco será suficiente con echar la vista atrás y refrescar la memoria de los ciudadanos respecto de los logros socialistas. Afortunadamente hoy, pasada la polvareda de los primeros noventa, ya los ciudadanos tienen la perspectiva suficiente como para valorar esa época en toda su dimensión. Nadie puede discutir a estas alturas que, con la izquierda, España mejoró sustancialmente en comparación con el país que habíamos heredado. ¿Por qué entonces parte de nuestro electorado nos dio la espalda en el año 96? ¿Por qué en las próximas elecciones podemos volver a correr el riesgo de no captar la voluntad de unos ciudadanos que, según todos los analistas políticos, se sitúan en el espectro de centro izquierda? Voy a intentar dar respuestas a estas dos cuestiones que me parecen fundamentales para la suerte electoral de la izquierda y para el futuro del socialismo.

Independientemente de los casos de corrupción individual que se dieron en los gobiernos socialistas por gente que nunca lo fue, creo que todos los españoles tienen asumido que los socialistas estamos preparados para gobernar. Lo hemos hecho durante trece años en España y lo seguimos haciendo en otras instancias políticas. Incluso pueden pensar sin equivocarse que estamos capacitados para mejorar sustancialmente la sociedad. A este respecto, en el año 2000 no tendremos el peso de la duda que se cernía sobre nosotros en 1982, cuando el gobierno de los PNNs. Ahora ya tenemos un excelente claustro de catedráticos en gestión de la cosa pública. Por ese camino tenemos las puertas abiertas para poder aspirar a conseguir tantos votos como el que más.

Pero me temo que el ciudadano de izquierdas, el de centro izquierda, y el progresista no desean sólo de un gobierno socialista que construya una sociedad mejor que la que construye la derecha. Lo que esperan esos ciudadanos de nosotros no es que construyamos una sociedad mejor, sino una sociedad distinta. Nadie se apasiona por una mejor gestión administrativa, pero es posible que muchos estén dispuestos a hacerlo por una ideología, por una visión del mundo, por la defensa de unos valores coherentes.



Cuando los partidos compiten por mejorar la gestión de la sociedad en la que vivimos, las diferencias entre opciones políticas tienden a neutralizarse y, en el momento de la elección, entran en juego factores que nada tienen que ver con la política sino que, más bien, se relacionan con el mercado, la publicidad, el marketing, el liderazgo, etc., etc. Con demasiada frecuencia se oye decir a destacados dirigentes de izquierdas que las clases sociales ya no existen y que, por lo tanto, hay que articular un discurso político que tenga en cuenta esa situación. También oímos que hablar de ricos y pobres es utilizar un lenguaje trasnochado. Yo no sé si seguirá existiendo el binomio ricos -pobres como el clásico motor de los conflictos políticos, de lo que sí estoy completamente seguro - y más en estos días- es de que siguen existiendo ricos.

La igualdad de oportunidades y el trasiego entre clases ha dado lugar a una amplia capa de ciudadanos de clase media que, independientemente de sus orígenes, comparten intereses concretos y tienden a reaccionar de manera uniforme ante las ofertas políticas. Algunos economistas califican a este sector como los satisfechos, yo prefiero llamarlos los acomodados. Por encima de ellos están los ricos y por debajo los pobres. Los acomodados conforman el sector más denso y extendido de nuestra sociedad, su aportación al crecimiento de nuestra economía es esencial y sus opciones electorales son decisivas para la obtención del gobierno por parte de la izquierda o la derecha.

Pero, por encima de estas tradicionales adscripciones políticas y dada la emergencia de esas clases sociales de nuevo cuño, izquierda y derecha no tienen más remedio que disputarse el voto de lo que he denominado acomodados. A éstos se les puede ofrecer o ideología o pragmatismo, o valores, o buena gestión de la cosa pública. La derecha ha apostado claramente por el pragmatismo y por la gestión. La izquierda que siempre defendió una aproximación ideológica de la política, se ha dejado arrastrar a ese terreno y parece empantanarse en el barro del fin de las ideologías. Y esto porque así, además, se libra de un debate complicado en un momento histórico en el que las perplejidades parecen haber tomado el puesto de las anteriores verdades inamovibles. El caso es que la izquierda se empeña en mejorar la oferta puramente gestora de la derecha en la búsqueda del apoyo de las clases medias acomodadas. Insistimos en el pragmatismo. La diferencia obvia es que para la izquierda ese voto es su única arma, mientras que la derecha tiene otros poderosos modos de conformar la realidad de acuerdo con sus intereses.

Ya he dicho que el único poder que no controla la derecha es el voto democrático, éste es el único mercado que no puede controlar. Ese poder no pertenece más que al poseedor del mismo, es decir, al ciudadano individual, independientemente de su condición económica, social o cultural. A ese mercado, que es el único incontrolable, es al que tiene que dirigirse la izquierda, al que tiene que dirigirse la izquierda, para poder llevar adelante su proyecto político. Quienes no tienen, quienes no tenemos ni poder económico, ni financiero, ni mediático, ni religioso, sólo podemos aspirar a tener el poder político para realizar nuestro proyecto. Y ese es el caso de la izquierda.

La derecha, por su parte, no necesita inexcusablemente del poder político para poder llevar adelante su modelo de sociedad. Los poderes fácticos siempre han existido y nunca han contribuido a los objetivos políticos de la izquierda.

Después de unos años del gobierno del Partido Popular ¿qué tiene ahora esta derecha que gobierna en España? El 80% del poder mediático, el 75% del



poder financiero, del que, paradojas de la vida, sólo está para Botín, BBA, Caixa, las Cajas más importantes están en sus manos. Así pues, finanzas, energía, comunicaciones, telecomunicaciones, multimedia, son controladas por una nueva oligarquía política, como en los viejos tiempos. Aunque perdieran las elecciones, ¿se imaginan ustedes cuánto producto interior bruto quedaría en sus manos? En este panorama, a la izquierda nos queda el voto, y por eso es trascendente para nosotros la participación de los ciudadanos en la cosa pública, porque sólo con los votos podemos construir la sociedad que queremos. La derecha, sin embargo, nunca se siente realmente defraudada por el bajo nivel de adhesión ciudadana al sistema político. Casi siempre ha sido la propietaria del poder político, y cuando excepcionalmente no ha podido ocupar esa parcela, ha ocupado otras desde las que influir, modular e incluso anular las políticas transformadoras de la izquierda en el gobierno.

Todavía resulta difícil explicar por qué la izquierda española, habiendo ocupado el poder político durante más de una década, no ha sido capaz de poner en marcha algunos proyectos demandados por su electorado, a pesar de que no costaban dinero o eran financieramente muy poco costosos. Sencillamente yo creo que fue por la sutil presión de esos nuevos poderes fácticos, siempre amenazando con provocar inestabilidad si se traspasaban determinados límites. Que en España, después de 13 años de gobierno socialista no haya todavía leyes reguladoras del derecho al aborto libre, público y gratuito; que no se haya aceptado la eutanasia; que no se haya hecho cumplir la Constitución en lo que hace referencia a la laicidad del Estado; que los colegios profesionales mantengan buena parte de un poder corporativo; que tengamos abierto un conflicto sobre la enseñanza de la religión en las escuelas públicas; etc., etc., sólo puede explicarse, no porque costara dinero sino por el excesivo poder que esas nuevas fuerzas tienen en nuestra sociedad, por vías ajenas al refrendo democrático.

Si desde la izquierda, que sólo tiene el voto como arma, se toma conciencia de que, aún teniendo el poder político, no se pueden tocar determinados ámbitos celosamente protegidos por los nuevos compañeros de viaje de la derecha, no es extraño que se alimente el desencanto. Sólo tengo una forma para construir la sociedad que quiero. Y cuando, tras una larga lucha, he alcanzado la posición teórica que me permite hacerlo, descubro que mi única arma es insuficiente y que poderes no democráticos consiguen neutralizarla en ciertos aspectos. El desencanto de los votantes de izquierda puede estar servido. Y la tentación de los partidos de izquierda puede ser acomodarse a esa situación, renunciar a transformar y ceñirse a competir en el campo de la mera gestión de las mejoras del sistema.

Esa neutralización, entonces, entre izquierdas y derechas sí es un factor profundo y revelador de desapego del ciudadano, -sobre todo del ciudadano de izquierda-, hacia la política. Ahí sí que tenemos una responsabilidad quienes hemos decidido militar en una organización de izquierdas para, conseguido el mayor número de votos ciudadanos, realizar una política diferente de la de derechas.

Ahora bien, dado este panorama de dificultades, ¿qué oferta hacer desde la izquierda a los ciudadanos de esa clase media acomodada para obtener su apoyo y que sientan que su voto va a ser útil y va a servir para algo y va a servirles a ellos también para algo? ¿Cómo romper esa tendencia a la neutralización de las diferencias políticas en un centro que amenaza con abarcar todo el espectro ideológico? ¿Cómo hacer patentes las diferencias que nos separan de la derecha liberal?

Libertad y democracia han sido dos banderas que el socialismo democrático siempre ha compartido con el liberalismo, el acento sobre la igualdad ha sido la nota diferenciadora entre una y otra forma de entender la sociedad.

Para la derecha, el Estado del Bienestar es un mero instrumento para prestar determinados servicios al ciudadano. Para la izquierda, por el contrario, el Estado del Bienestar es o debe ser un instrumento de redistribución de la riqueza.

Si el Estado de Bienestar se concibe, como hace la derecha y algunos de izquierdas, como una prestación de servicios, todos los servicios son susceptibles de privatizarse y, por lo tanto, de ponerlos en el mercado para que sea la iniciativa privada la que los gestione.

Por el contrario, si el Estado de Bienestar es un instrumento de redistribución, ese instrumento debe permanecer siempre bajo el control del poder público, ya que no es concebible dejar al mercado la redistribución o si se quiere, la lucha por la igualdad.

Separar servicios y, por lo tanto susceptibles de ser privatizados o de ponerlos en el mercado, de lo que son políticas de igualdad y, por supuesto, mantenerlos en la órbita estatal, es la gran tarea que tiene por delante la izquierda si quiere seguir contando con el empuje de los ciudadanos que ven en la lucha por la igualdad, independientemente de su nivel económico, una de las razones fundamentales de su compromiso político y social.

Desde mi punto de vista esos instrumentos de redistribución son los siguientes:

Los impuestos y, particularmente, el impuesto de la renta de las personas físicas. Todo el mundo admite que éste es un instrumento fundamental de reequilibrio interpersonal. La propia Constitución así lo estipula. Podremos discutir cuánto exceso de renta se redistribuye, pero nadie se plantea privatizar este instrumento de redistribución. En eso no hay discusión. Si ese impuesto sirve para redistribuir parece lógico que no deba ni privatizarse, ni trocearse, ni transferirse, ni tampoco ser usado para fines distintos, tales como financiación de las autonomías, etc., etc., para lo que fue creado.

Segundo elemento de redistribución: la educación. No es, ni puede ser, un servicio que presta el Estado. La concepción como servicio implica o puede implicar su privatización parcial o total, y la prestación del mismo haciéndola depender de la riqueza que se crea en el país. Si hay muchos recursos se presta mejor el servicio educativo, y si los recursos escasean se recortan prestaciones, como quien en mala situación económica recorta gastos superfluos. Esta concepción economicista de la educación no puede ser nunca aceptada por la izquierda que debe ver en la enseñanza el mejor instrumento para la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Si la caja está llena, -y, eso queremos todos-, no habrá problemas para impartir una enseñanza gratuita, pública y de calidad para todos en los niveles obligatorios. Pero, cuando las vacas vienen flacas, si la caja comienza a vaciarse la solución, por la izquierda, no es modificar el pasivo, es modificar el activo.

Quien así ve la educación, no tendrá más remedio que alejar a la misma del mercado y por lo tanto de la iniciativa privada. La educación vista como generadora de igualdad de oportunidades, no puede ir detrás de la iniciativa privada, sino al

contrario y, en ese caso, solo para complementar a la pública allá donde ésta, todavía, no haya llegado.

Tercero, otro ejemplo de lo que digo es la sanidad. Tercer factor de redistribución Si la sanidad, mejor dicho, si la salud de la gente es lograr que la persona viva más y también viva mejor, es sólo un servicio. Estaría más o menos claro que podríamos encontrar la solución en lo público o en lo privado, según se quisiera. Pero yo hablo de otra cosa, hablo de un derecho de los ciudadanos y de un instrumento de igualdad para quienes tenemos la responsabilidad de hacer efectivos esos derechos. En el nacer, en la salud, en la enfermedad, en el morir, se pone de manifiesto la desnudez y la fragilidad del hombre.

El Presidente del Consejo de Administración de una gran empresa ubicada en las Torres Kio, por ejemplo, y el trabajador de esa misma empresa en un pueblo de Extremadura, o de Asturias, o de Aragón, pueden contraer la misma enfermedad. En eso sí que somos todos iguales. Pero si la sanidad es un servicio, y por lo tanto privatizable, la respuesta a esa enfermedad ya no sería la misma por muchas razones y ahí ya esos dos ciudadanos no serían iguales. Lo que los hará desiguales en un derecho fundamental será concebir la sanidad como un servicio y no como un instrumento de igualdad.

¿Y por qué digo esto? Porque si como, yo afirmo, es un instrumento de igualdad, la sanidad, la respuesta se la tiene que dar el Sistema de Salud y no el mercado. Si dejamos que sea el mercado quien lo resuelva lo hará con un instrumento legítimo, pero que genera la desigualdad cual es la rentabilidad. Y la salud como derecho no es privatizable.

Por eso reivindico que además de la política de realidades haya una política de ideas.

No me sitúo frente a que se dé cabida al mercado en la sanidad por ser un servicio público, sino porque la gente debe saber que es el comienzo de un camino que nos lleva hacia un fin distinto al que yo pretendo, es decir, el de la igualdad de oportunidades también para vivir.

Aquellos países que han entendido que la sanidad es sólo un servicio y, por lo tanto privatizable, y han introducido elementos en el mismo buscando sólo la eficacia, la competitividad y la rentabilidad, han dejado fuera a mucha gente, lo que ha provocado que, sin dejar de ser un servicio sanitario, y si me permiten, en algunos casos un gran servicio sanitario, en cambio ha dejado de ser un instrumento de igualdad.

El cuarto y último elemento de redistribución: las pensiones. Es un instrumento de solidaridad de las generaciones activas con las pasivas. Se trata como se ha dicho con afortunada expresión, de un mecanismo de solidaridad intergeneracional. Y esta vasta operación, tanto por su cuantía como por la extensión en el tiempo, debe ser garantizada por el Estado. Esto no lo puede hacer el mercado.

Las pensiones no son, ni deben ser, un servicio que se compra en función de los recursos de los ciudadanos. Se trata de un derecho de quienes ya trabajaron, y ese derecho debe ser garantizado por el Estado.



La izquierda debe decir con claridad que la sustitución de un sistema de pensiones público, obligatorio, basado en la distribución permanente entre activos y pasivos, es más justo y más resistente que un sistema privado e individual. Y cuando reconocemos que el mercado es mejor que el Estado para producir aceite, también tenemos que decir que el Estado es mejor que el mercado para garantizar un sistema intergeneracional de reparto de rentas.

Los fondos de pensiones serán, en todo caso, un complemento que compren en el mercado quienes tengan un exceso de renta, pero no deben jamás significar una disminución del nivel contributivo del comprador a la hacienda pública. No parece lógico, por lo tanto, que los fondos de pensiones privados signifiquen para sus suscriptores beneficios fiscales en detrimento de la Hacienda Pública.

Son estas valoraciones las que la izquierda debe poner en el debate político. Hay que poner a esas amplias clases medias acomodadas en estos dilemas morales, porque no se entiende que una parte de la elogiada sensibilidad que ponemos en ayudar, por ejemplo, en las catástrofes del Tercer Mundo, no sea trasladable a las necesidades más cercanas. A lo mejor puede darnos tanta íntima satisfacción como ciudadanos poner una transferencia para una cuenta de la Cruz Roja como votar a un partido que va a trasladar esa escala de valores solidaria a la vida pública española. Y no son dos acciones alternativas, sino congruentes. Lo contradictorio puede ser irritarse con la desigualdad y la injusticia en el Tercer Mundo y mostrarse insensible a las políticas que alientan aquí la discriminación del trabajador que vive al lado, del anciano con el que nos cruzamos en la calle o del compañero de pupitre de nuestros hijos. La desigualdad no es un fantasma lejano del que sólo conocemos por los telediarios. La amenaza a la igualdad, aunque desde luego en una escala mucho menos dramática, también está a nuestro alrededor. Y es labor de la izquierda que los ciudadanos se planteen estos mismos dilemas morales, para que reaccionen congruentemente ante ambas muestras de injusticia.

Las de renta, salud, educación y las pensiones son cuatro políticas fácilmente entendibles por los ciudadanos. Y todas ellas deben aparecer de nuestra mano teñidas por las ideas no menos queridas por los españoles de igualdad y redistribución. Pueden ser el esqueleto argumental del cual colgar el resto de propuestas y nos permiten una diferenciación clara de las posiciones de la derecha. Son, por estas mismas razones, banderines de enganche y de entusiasmo para una buena parte de la población a la que se le adivinan las ganas de volver a apoyar al PSOE si éste, como en el boxeo, logra salirse de la táctica del forcejeo cuerpo a cuerpo con la derecha y marcar las distancias buscando el mentón del adversario.

La derecha sabe que en este discurso está la baza de los socialistas para volver a ser reconocidos por los ciudadanos como la gran fuerza del cambio y de la transformación de España. Lo verdaderamente llamativo no es que la derecha haya iniciado su precampaña electoral volviendo a la vieja cantinela de paro, corrupción y despilfarro socialista, sin que hasta ahora los socialistas hayamos decidido dar un puñetazo en la mesa que ponga fin a esta bochornosa historia de revisión mentirosa y parcial de nuestro paso por el gobierno, mientras los demás, incluido el actual Presidente del Gobierno, se libran de esta revisión que, de hacerse, probablemente, llenaría de vergüenza la tan cacareada modélica transición.

Lo verdaderamente novedoso, decía, es que la derecha ha tomado la decisión de librar estas próximas elecciones en el terreno de lo que ellos llaman "lo social". Han llegado a la conclusión de que la única manera que tienen de ganar las



próximas elecciones, y no hay más que escuchar a su portavoz, es aparentar que ellos son los verdaderos socialistas.

He aquí el mejor ejemplo de que los ciudadanos sí quieren acción colectiva. La gente sabe muy bien, intuye, que las soluciones no son las que aplicaron los liberales en Estados Unidos o en Inglaterra, donde se gasta el doble de dinero que en España en sanidad, y donde hay millones de ciudadanos que no tienen derecho a ir a un hospital, y tampoco pueden pagárselo.

La tercera reflexión es el ámbito de la redistribución. Una concepción común del Estado.

Para que esa política de redistribución pueda llevarse a cabo, es necesario saber con exactitud el espacio humano, social, económico y político donde va a desarrollarse.

Estoy diciendo que es necesario que los españoles sepamos qué es nuestro país, cuál es su definición y a qué nos comprometemos.

Les confieso, y me da cierta vergüenza, que después de 21 años de democracia constitucional, no sé definir a España. Estoy seguro que en las 17 Comunidades Autónomas se darían definiciones distintas de lo que es España. Y me temo que la opinión pública no sabe muy bien a qué atenerse al respecto.

Como Presidente de una Comunidad Autónoma suelo atender con frecuencia las peticiones de entrevista de distintos medios regionales, nacionales y extranjeros que me la solicite.

En un país definido no tendrían mucho sentido preguntas como éstas, que me hacen los periodistas: ¿Qué es usted?; ¿Qué es para usted el Estado de las Autonomías?; ¿Qué piensa del Derecho de Autodeterminación?; ¿Está de acuerdo con que España sea un Estado Federal?; ¿Qué le parece la propuesta de Federalismo asimétrico y la de la de Federalismo cooperativo?; ¿Aceptaría que el Estado cediera competencias del artículo 149 de la Constitución a tal Comunidad?; ¿Pediría usted dichas competencias para su región?; ¿Qué piensa de los seis sistemas de financiación autonómica que existen en estos momentos en España?

No es extraño que después de las respuestas uno escuche la réplica del periodista, sobre todo si es extranjero, cuando dice: “No es eso lo que dice el Presidente de tal otra Comunidad”. “Esto no es lo que dice su compañero de partido de tal región”.

La conclusión es que necesitamos desde la izquierda articular una definición política de España. Para ello se necesita huir de las coyunturas electorales y tener la garantía de que sea cual sea el resultado electoral, nadie se va a levantarse una mañana sorprendido por una configuración de España que nadie había previsto, ni discutido, ni consensuado.

Frases como la de Maragall de la semana pasada diciendo que “España no podrá resistir una mayor demanda de autogobierno si la pide todo el Parlament”, es el síntoma de que falta una definición de país.

¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se define el concepto “Estado de las Autonomías” que los constituyentes dejaron sin definir? Es comprensible que la

derecha no tenga ningún interés en defender un Estado fuerte porque cuanto menos Estado, más mercado. Pero la izquierda no debe dejarse arrastrar por la coyuntura o por el oportunismo electoral, porque si concluimos que el voto es el único poder que puede tener la izquierda, el poder político es el único instrumento que esa izquierda puede utilizar para llevar adelante sus políticas de transformación y de redistribución. Es hora de superar complejos ante los nacionalistas. Como se viene observando en los distintos procesos electorales, los ciudadanos de las Comunidades Autónomas llamadas nacionalistas tienen más interés en participar cuando se decide sobre el futuro de España que sobre el futuro de su nacionalidad. ETA ha sido la única en darse cuenta de esa eventualidad, lo que le ha llevado a marcar una táctica abstencionista en las próximas elecciones generales con el objetivo de borrar esa imagen que le negativiza las aparentes “ansias de independencia” del pueblo vasco.

No estoy pidiendo que se cierre el proceso de transferencias. Estoy demandando que, de una vez por todas, se defina claramente qué cosas, qué aspectos, qué políticas son de interés general para el Estado y que de ninguna manera pueden ser, una vez definidas, troceadas, cedidas, delegadas o transferidas, salvo que se quiera eliminar el interés general.

La subsidiariedad es una buena política siempre que no perjudique la cohesión interna, la solidaridad entre españoles y la identidad.

Desde un país definido y articulado, la izquierda puede encontrar aliados, que no sientan dentro de España, que no sientan el desencanto de la política, si emite señales de que verdaderamente la democracia y la lucha contra las desigualdades fuera de las fronteras nacionales está dentro de sus preocupaciones y de sus riesgos.

Un partido que se proclame de la socialdemocracia tiene que emitir señales que hagan saber a los ciudadanos de otras latitudes que no se permitirán juegos ni experimentos con la democracia. La Europa rica en la que estamos integrados, a través de la Unión Europea, siempre ha tenido a gala impedir la entrada de países gobernados por regímenes autoritarios. La izquierda debería imponer la salida de la Unión de aquellos países donde la extrema derecha, xenófoba y racista, gobierne, aunque haya llegado al Gobierno por métodos democráticos. Los ciudadanos europeos deberemos aprender y saber que el voto en una democracia tiene sus costes, que nada es gratis. Votar racismo, xenofobia, aislamiento frente al mundo exterior debe llevar aparejado aislamiento internacional y salida del club europeo. Si los austriacos o los daneses, por poner un ejemplo, prefieren estar gobernados por la extrema derecha que les aleja de los pobres, de los inmigrantes, de los que tienen otro color de piel, deben saber que ese voto también les aleja de la Unión Europea, que no deberá albergar en su seno a ese tipo de países por muy alta que sea su renta.

Termino, como conclusión, diciendo que con esta conferencia he pretendido que enfoquemos la cuestión del desencanto ciudadano con la política, no desde el punto de vista habitual de las propuestas de reforma de mecanismos institucionales, sino recalando en la necesidad de la izquierda de ofrecer alternativas reales y diferenciadas a las políticas conservadoras. No son ofertas de un mejor mercado, ni de una rentabilidad económica evidente, ni son meros ofrecimientos de una más eficaz gestión de los asuntos diarios. Ese tipo de cosas ya saben los ciudadanos que pueden hacerlas cualquiera de los partidos con experiencia de gobierno, y que deben hacerla y que la hacen. Son, por el contrario, propuestas que singularizan a la

izquierda y que le permiten marcar una vía propia reconocible por los ciudadanos. Un programa que puede reenganchar a muchos desilusionados en mayor medida que las meras correcciones técnicas de tipo electoral o en el funcionamiento de los partidos. No he visto época de menos desencanto con la política española que el otoño de 1982. Se trata tan sólo de volver a ofrecer a la gente la posibilidad de apasionarse con los asuntos públicos, de asegurarles que, con su voto, es posible transformar su sociedad más cercana, redistribuir más justamente la riqueza y contribuir, al mismo tiempo, a mejorar la situación de muchas personas lejanas que consideran un privilegio ejercer los derechos que aquí muchas veces se desprecian.

Muchas gracias.

